

Una democracia inesperada

ALAIN ROUQUIÉ

Presidente de la Maison de l'Amérique Latine en Paris. Politólogo y especialista de América Latina contemporánea.

ESTUDIOS SOCIALES

[Número especial • 2023]
Voces plurales para pensar la
democracia argentina (1983–2023)

Estudios Sociales. Revista Universitaria Semestral
Universidad Nacional del Litoral, Argentina
ISSNe: 2250-6950
estudiossociales@unl.edu.ar
DOI: 10.14409/es.2023.64.e0051

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.



¿Por qué y para qué se celebran 40 años de democracia continua en la Argentina? Países de formación similar no se han preocupado de contabilizar sus años de régimen representativo. Entre otras cosas, porque Canadá, Australia, o Nueva Zelanda, Estados democráticos poblados por inmigrantes europeos no han conocido ningún otro tipo de sistema político. Pero Argentina ha sido caracterizada políticamente por una «anormalidad obstinada» incluso comparada con sus vecinos de América del Sur.

En Brasil ha gobernado durante 21 años, entre 1964 y 1985, un régimen autoritario de base militar. En Chile se estableció en 1973, y por 21 años, la dictadura personal del general Augusto Pinochet. Sin embargo, antes de este paréntesis autocrático los dos países vivían en democracia. Pero en la Argentina las fuerzas armadas han dominado la vida política desde 1930 hasta 1983. En este medio siglo los golpes de Estado imponían dictaduras militares de corta duración a los que sucedían gobiernos representativos tambaleantes. Así es cómo funcionaba una república pretoriana.

LA REPÚBLICA PRETORIANA

En el medio siglo que termina en 1983, de los 24 jefes de Estado que gobernaron el país, 16 eran generales. Y a diferencia de lo que ocurrió en los dos países vecinos la Argentina no ha conocido dictaduras militares de larga duración. Las dos últimas abandonaron el poder después de siete años (1966–1973 y 1976–1983), lo que dejaba un paréntesis de gobierno civil intermedio de solo tres años. Además, la inestabilidad política no ha ahorrado a los dictadores militares. Así es como en el último gobierno de las fuerzas armadas (el llamado Proceso de Reorganización Nacional), solo el general Videla terminó el mandato presidencial asignado por sus pares.

Además, las discontinuidades políticas no procedían solamente de las rupturas violentas del orden representativo. A partir de 1930 una alianza entre militares y conservadores excluye de la vida política y del poder a los partidos populares y reformistas. La Unión Cívica Radical, el partido de Irigoyen, fundador de la democracia argentina, fue proscrito de la participación electoral o víctima del fraude abierto y sin escrúpulos. También el movimiento peronista mayoritario en las elecciones de 1946 y 1951 se proscribió a partir del golpe de Estado «libertador» de 1955 y hasta 1973. Se trataba así de cortar el camino del poder a un movimiento que tenía un fuerte apoyo de las clases populares. De ahí que las elecciones con proscripción dan como resultado gobiernos legales, pero ilegítimos y vulnerables. Un presidente minoritario y mal elegido dura poco.

La militarización de la vida pública iba aún más lejos inspirando prácticas de oportunismo faccioso. Así, se había trivializado de tal manera la intervención de los militares en la vida política que las violaciones del orden constitucional parecían casi normales a amplios sectores de la sociedad. Las

oposiciones en vez de apoyar el orden constitucional amenazado llamaban a las puertas de los cuarteles contra el poder de turno. Y todos los partidos hasta la extrema izquierda nasserista soñaban con «el coronel propio» para promover sus intereses.

También, entre 1955 y 1983 toda la vida política nacional giraba alrededor del problema aparentemente sin solución de la integración sin riesgo del justicialismo. Solo así se podía poner fin a la alternancia perversa entre militares sin legitimidad y civiles mal elegidos. Pero para detener este mecanismo infernal se necesitaba un acontecimiento excepcional. Da la casualidad que este se produjo en 1983.

UNA MILAGROSA DERROTA

Los militares se retiran al cabo de siete años de una dictadura violenta y desastrosa, y las elecciones libres y sin proscripción tienen lugar el 30 de octubre de 1985. El balance del llamado proceso es agobiante. La «guerra sucia» del terrorismo de Estado ha sido acompañada de una «economía sucia» de corrupción sin freno. La aventura patriótica salvadora de reconquista de las Malvinas terminó con una derrota humillante frente a las tropas británicas. Sin embargo, en 1983 muchos comentaristas y parte de la opinión pública no dudan de la victoria del peronismo. Se espera o se teme una reiteración de la alternancia entre militares y peronistas que podría prolongar la inestabilidad. Pero no sucedió así y lo increíble se produjo: ganó el candidato radical con 52 % de los votos, o sea, 2 millones de sufragios más que su adversario justicialista.

La victoria de Raúl Alfonsín constituye un giro en la historia política argentina y el fin de un ciclo. El candidato radical es un hombre nuevo procedente del sector renovador

y progresista de la vieja UCR. Dentro de su partido como en la campaña presidencial ha denunciado la colusión de los políticos con los militares y su aceptación de la lógica pretoriana. Alfonsín y sus partidarios quieren romper con este oportunismo sin principios que para muchos es una simple adaptación a la realidad política del momento. Por esto no compartieron la fiebre nacionalista de muchos políticos que apoyaron la Junta Militar en desbandada en su intento de recuperar las Malvinas. Alfonsín condena la política facciosa y proclama que el derecho y las instituciones están por encima de los intereses de partido y de persona. Por esto nunca omitía en sus discursos de campaña citar el preámbulo de la Constitución Nacional.

La mayoría del electorado votó en contra de los militares y también contra el último gobierno peronista, el de Isabel Perón, cuyo vicepresidente, Ítalo Luder, era el candidato del justicialismo. La victoria radical fue posible porque Alfonsín denunció la complicidad entre el peronismo y los dirigentes militares de la dictadura en derrota. Más precisamente, Raúl Alfonsín hizo campaña contra la impunidad y por el juicio de los responsables del terrorismo de Estado. El candidato peronista, por su parte, se oponía a la derogación de la ley de autoamnistía promulgada por la Junta Militar. Al contrario, era partidario de la reconciliación y del olvido de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura represora.

Candidato exorcista, el nuevo presidente ha revelado la parte oculta y oscura de la vida política argentina pretorianizada. Si bien una sociedad enferma ha manifestado su voluntad de vivir sin violencia y sin miedo, nadie confía ni en la estabilidad del gobierno radical ni en el futuro sin interrupción de la democracia; el gobierno constitucional heredero de una economía desquiciada, de instituciones arruinadas y de fuerzas armadas mesiánicas que se precian

de su victoria en la «guerra antisubversiva». Todo eso configura una situación poco favorable a la reconstrucción institucional. Sobre todo porque los dirigentes peronistas no logran entender cómo «el partido mayoritario» ha podido perder ante una UCR que nunca había superado, desde 1930, el 25 % de los sufragios. Sin embargo, han aceptado la victoria del radicalismo considerando que era circunstancial y precaria. Por cierto, que no faltan los desafíos ni las bombas de tiempo. Pero la urgencia consiste en desmilitarizar el Estado, la vida política y la sociedad para terminar de una vez con la violencia aceptada y las aventuras inaceptables de las fuerzas armadas de la Nación.

DESMILITARIZAR LA ARGENTINA

¿Será posible asegurar el buen funcionamiento de las instituciones representativas después de medio siglo de dominación militar y de siete años de guerra del Estado contra los argentinos? Para esto se necesita desmontar la maquinaria terrorista de la dictadura sin disolver las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad. Para abolir la legitimidad facciosa, el gobierno legítimo de derecho tiene que responder del terrorismo de Estado, es decir, buscar la verdad de lo que pasó e imponer la justicia sin temor. Frente a estas necesidades imprescindibles los militares del proceso exigen que el Estado democrático reconozca todo lo inconfesable que hicieron como simple «acto de servicio». No aceptan ninguna responsabilidad en los crímenes de la represión como si «el honor de los cuarteles estuviera por encima de los derechos humanos». Solo quieren responder ante Dios, de ninguna manera ante la justicia de los hombres.

A pesar de esta posición arrogante y sediciosa y de la vulnerabilidad del gobierno democrático, Alfonsín después

de derogar la ley de autoamnistía superando la oposición de los peronistas va a llevar a los tribunales ordinarios a los responsables de la dictadura, y a una autodepuración por la justicia militar que ha sido rechazada por los «vencedores de la subversión». Para la opinión pública el problema de los desaparecidos es la prioridad. Se forma una comisión nacional pluralista e independiente (la CONADEP) que recusan los peronistas. Esta comisión, presidida por Ernesto Sábato, rinde su informe, «Nunca más», en setiembre de 1984. Revela hechos indiscutibles y agobiantes. Los crímenes de los represores no fueron excesos accidentales, sino que correspondían a un programa sistemático de aniquilamiento, una «máquina de matar» cuya meta iba mucho más allá de la oposición armada. Quince miembros de las Juntas de la dictadura comparecen ante un tribunal penal civil y reciben severas penas. Videla y Massera son condenados a cadena perpetua.

Después de las terribles revelaciones del informe de la CONADEP, los sobrevivientes y los testigos hablan. Se multiplican los procesos contra militares. El aparato judicial se desboca mientras los partidarios del proceso se indignan ante este Núremberg al revés que condena a los vencedores. La «mano de obra desocupada» de los servicios de inteligencia fomenta complots y difunde rumores de sublevación; y estas ocurren de verdad, empezando con Campo de Mayo en Semana Santa de 1987. El gobierno teme un movimiento de defensa corporativa contra la democracia. Parece evidente dada la correlación de fuerzas del momento que no se podía llevar a juicio a todos los actores de la guerra sucia. Según el principio adoptado «ni olvido ni venganza» se consideró más prudente y ético «golpear arriba y perdonar abajo». Así se promulgan leyes que fijan plazos y grados para los juicios. Estas decisiones fueron muy mal recibidas por la opinión y la clase política. Hasta los peronistas que habían apoyado

la impunidad criticaron las leyes de «punto final» y «de obediencia debida». Sin embargo, estas leyes generosas no impidieron que los comandos «carapintadas» que intervinieron en la guerra de Malvinas se rebelaran dos veces en 1988.

Pero la desmilitarización no se limitó a condenar a los represores de mayor responsabilidad. Cincuenta generales pasaron a retiro de oficio. En 1986 los efectivos del ejército lo mismo que los presupuestos militares se reducen a la mitad. A pesar de la ley de prescripción más de 300 oficiales se presentan ante los tribunales. Además, había que quitar a las fuerzas armadas cualquier pretexto militar de intervención en la vida política como eran los conflictos territoriales de Malvinas o del Canal de Beagle con Chile. «Desmalvinizar» no significaba abandonar a las víctimas de esta lamentable aventura política, sino dejar la palabra a la diplomacia. En cuanto al conflicto fueguino que estuvo a punto en 1978 de provocar una guerra con el país vecino, una acción diplomática audaz apoyada en la mediación del Vaticano (que los peronistas rechazaron) ofreció una solución de paz duradera.

Esta desmilitarización va a proseguir, a pesar de todo, con el sucesor peronista de Alfonsín, Carlos Menem, elegido en 1989. Menem tuvo una política compleja y contradictoria con los militares. Crítico de su predecesor radical y de sus leyes de limitación de los juicios, se erige pronto campeón de la reconciliación nacional y del olvido. Así es como en diciembre de 1990 concede a todos los militares condenados la gracia presidencial. Lo mismo se indulta a los responsables de los levantamientos militares de la presidencia anterior. Lo que no impide una nueva sublevación de los «carapintadas» en diciembre de 1990, esta vez contra la política exterior del gobierno de Menem de acercamiento a los Estados Unidos. Esta es reprimida sin contemplaciones. Sera la última hasta hoy.

La política ultraliberal de este gobierno que privatiza todos los activos públicos reduce los gastos, afecta directamente los presupuestos y, por ende, los sueldos militares. Se venden todas las industrias del holding Fabricaciones Militares que daban un peso económico importante a las fuerzas armadas. Pero la estocada final fue la supresión por Menem del servicio militar obligatorio que en un país de inmigrantes se veía como la «escuela de la nación». El cuerpo de oficiales en razón de este papel de «crisol del pueblo» se había atribuido la vocación de definir la esencia nacional. Así los militares argentinos perdieron uno tras otro sus fuentes de influencia y de soberbia.

Menem, como Alfonsín, practica una política regional de paz y de cooperación suprimiendo así las hipótesis de guerra tradicionales de las fuerzas armadas. Por el Tratado de Asunción transforma el acuerdo Argentina-Brasil sobre medidas de confianza en un proyecto de integración regional con Uruguay y Paraguay. En 1994 en Ouro Preto se crea una unión arancelaria. En 1997, Brasil, rival histórico, se vuelve el principal socio comercial de Argentina. También en cuanto a las tierras irredentas del Atlántico Sur, Carlos Menem restablece las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña en febrero de 1990 y Argentina se compromete a utilizar solo medios pacíficos para alcanzar sus objetivos territoriales.

EL PERONISMO EN DEMOCRACIA

La derrota imprevista de 1983 fue un verdadero terremoto para la dirigencia peronista. Su incredulidad creció aún más al descubrir que el radicalismo había ganado hasta en los baluartes históricos del movimiento en el Gran Buenos Aires y la Provincia. ¿Será que el justicialismo huérfano y sin

líder, incapaz de adaptarse a un contexto democrático, estaría condenado a desaparecer? Antes de resignarse a este desenlace poco probable se produce un enfrentamiento entre los renovadores y los ortodoxos «mariscales de la derrota», el sector que dirigió la campaña electoral. De un lado estaban los políticos que querían adaptarse cuantos antes al contexto cambiante, del otro los verticalistas, en particular de los sindicatos.

En estas asociaciones profesionales las «elecciones» internas se practicaban usualmente de arriba hacia abajo. Alfonsín no logrará normalizar la vida sindical e imponer elecciones transparentes sin fraude ni amenazas. Más aún, su malogrado proyecto de ley sindical democrática fue percibido por la dirigencia como una declaración de guerra. Así es como la CGT organizó durante el mandato de Alfonsín 13 huelgas generales, en su mayoría de naturaleza política.

Si bien no hubo en el movimiento justicialista ni debate de conciencia ni autocrítica para entender las razones de la victoria radical, el reconocimiento de la realidad se impuso: se gana el poder en las urnas y el pueblo elector no pertenece a nadie. El justicialismo finalmente acepta la incertidumbre electoral, es decir, la posible alternancia entre partidos políticos rivales. Pero al mismo tiempo ya que el movimiento no tiene líder natural e histórico necesita transformarse en partido político. Sus dirigentes serán designados en consultas internas confiables y sin trampa en las que todos los afiliados podrán, en principio, participar.

En una nebulosa fragmentada como es el peronismo todas las alianzas son posibles. Así es como un senador renovador poco conocido, exgobernador de la provincia de La Rioja, aliándose con los ortodoxos va a ser el candidato peronista para la elección presidencial de 1989. Carlos Menem representa la nueva estructura de poder del justicialismo donde los gobernadores del interior tienen una enorme

influencia. El candidato es elegido presidente sin programa. Ha lanzado algunos conceptos vaporosos y sobre todo ha pedido un voto de confianza frente a su adversario radical que anunciaba con toda franqueza un plan de ajuste severo y doloroso. Ya en el gobierno, Carlos Menem, lejos de las expectativas sonrientes que había inspirado, impone al país un tratamiento liberal de shock. La reforma del Estado privatiza todos los servicios públicos. Para reducir los gastos se suprimen todos los subsidios y se establecen tarifas al precio real. En la revolución productiva de Menem manda el mercado. El Estado no interviene. La economía va a funcionar en piloto automático.

Evidentemente, esta cirugía mayor sin anestesia practicada por el entusiasta jefe de Estado neoliberal tiene un enorme costo social. Se sitúa además en las antípodas de lo que fue el dirigismo de Perón y su política de transferencia solidaria. Los medios financieros internacionales aplauden. Para el sector empresarial este gobierno «desperonizador» inspirado por Reagan y Thatcher es un sueño inesperado. Pero esta política antiperonista ejecutada por ministros del sector privado no ha sido suficiente para detener una inflación sin freno. Por eso se va a recurrir a una solución mágica nunca utilizada en un país grande y complejo. El *currency board* —o sea «la convertibilidad»— impone la paridad peso/dólar. Este sistema que suprime la soberanía monetaria del país va a producir un fuerte crecimiento con aumento de las importaciones. Es verdad que muchas empresas no resisten este tratamiento brutal que junto con las reformas liberales agrava el desempleo, la informalidad y la pobreza. Pero al mismo tiempo la «convertibilidad» crea una ilusión de prosperidad y de casi pertenencia al primer mundo que agrada a buena parte de las clases medias.

La desperonización llevada a cabo por un presidente justicialista satisface sobre todo a las clases medias

independientes. Así va a contribuir también a cambiar la imagen del peronismo que ya no asusta más a nadie. Esta sorprendente mutación antiobrera ayuda paradójicamente a afianzar el sistema representativo. El contexto parece favorable para una reforma constitucional.

Carlos Menem aspira reelegirse y para este fin va a negociar con la dirigencia radical una modificación de la Constitución de 1853. Así se introduce en noviembre de 1993 en la vieja Carta Magna, además de la posibilidad de una reelección presidencial consecutiva, algunos cambios que, en principio, consolidan el orden democrático, como la elección directa del presidente, con un mandato reducido a cuatro años y la creación de un Consejo de la Magistratura independiente. También, se da rango constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Es cierto que los radicales y Alfonsín en particular que negoció directamente la reforma con Menem en la residencia presidencial (de ahí su nombre de Pacto de Olivos) obtuvieron un sistema electoral de doble vuelta y balotaje que en principio favorecía los partidos no peronistas. Sin embargo, la alergia de los radicales a los pactos y a las negociaciones a puerta cerrada divide el viejo partido de Yrigoyen y provoca su gradual declinación.

En la elección para una asamblea constituyente la UCR dividida se encuentra relegada con menos de 20 % de los sufragios. Mientras Menem obtiene un segundo mandato presidencial, el candidato radical obtiene solo 17 % de los sufragios. El justicialismo oficial y una coalición de peronistas disidentes suman 76 % de los votos. El movimiento parece haber recuperado su dimensión mayoritaria. Tal vez por poco tiempo. Después de un zenit que favoreció la reelección de Menem, la trampa de la convertibilidad se cierra. La crisis financiera internacional de 1997 golpea con dureza la ilusión menemista. La balanza comercial se deteriora

rápidamente, la fuga de capitales hace más evidente un nivel de corrupción escandaloso. De repente la Argentina que para algunos beneficiarios parecía haber ingresado al primer mundo se encuentra en su periferia empobrecida y dependiente.

En la elección presidencial de 1999, el candidato peronista Duhalde —exvicepresidente de Menem— recibe menos votos que Luder en 1983. La alternancia funciona en ambos sentidos. El peronismo no es ni permanentemente mayoritario ni invencible. El nuevo presidente Fernando de la Rúa es un radical conservador que ha formado una alianza frágil con un grupo de izquierda peronista. El radicalismo hace campaña sobre la moralización de la vida pública y el antimemenismo, esquivando el problema principal que es la paridad monetaria. No se habla de devaluación. De la Rúa propone al país «un menemismo sin Menem», cuando en el Gran Buenos Aires más del 35 % de la población vive por debajo del nivel de pobreza. La absurda paridad estabilizadora ha ahogado a la economía y empobrecido a la mayoría de los argentinos.

Las elecciones parciales del año 2000 manifiestan el profundo malestar de la sociedad. El 47 % del electorado se abstuvo o votó en blanco. Aparece ya el eslogan antipolítico «que se vayan todos». La situación es explosiva. Frente a una hemorragia de dólares el gobierno toma la peor medida posible: el bloqueo de los depósitos bancarios y la limitación de los retiros en efectivo. Como se sabe, los pagos en efectivo alimentan el sector informal y el comercio callejero, verdadero amortiguador social de las crisis. Se cierne sobre el país el espectro del «argentínazo», una explosión violenta cuando ya grupos más o menos improvisados empiezan a saquear las tiendas y los supermercados. El peronismo oficial rechaza la propuesta del presidente de formar un gobierno de unidad nacional. Lejos de tratar de calmar la violencia se solidariza

con los manifestantes y echa leña al fuego en nombre de su solidaridad con el pueblo. El presidente que ha perdido el contacto con la realidad renuncia para evitar una sublevación incontrolable. Se considera, sin embargo, que su caída no tiene nada de accidental. Y él mismo ha afirmado que fue «víctima de un golpe de Estado en un marco constitucional». La expulsión por la calle de un presidente radical bien elegido señala sin lugar a dudas que para los peronistas ha llegado la hora de la revancha.

Según la Constitución ya que el vicepresidente había renunciado en octubre de 2000, le toca al Congreso en caso de acefalía elegir a un jefe de Estado interino para terminar el período presidencial. Ahora bien, el Senado depende de los gobernadores que son en su mayoría peronistas. El poder territorial se ha fortalecido mucho con la transferencia de competencias federales a las provincias que por razones financieras se efectuaron en los años 90. Por otra parte, los dirigentes del interior por su longevidad en el poder muy a menudo han convertido su provincia en feudo de familia o de clan como en San Luis, Neuquén o Santa Cruz, y tienen mucha influencia en la política nacional.

El primer sucesor, el gobernador de San Luis, tiene el valor de reconocer que el país está en quiebra. Pero dura solo una semana. El siguiente, vicepresidente del Senado, contribuye a la designación del hombre fuerte del justicialismo, gobernador de la provincia más rica del país, Eduardo Alberto Duhalde, el mismo que fue derrotado por De la Rúa en la última elección presidencial. Curiosa situación en la que el que perdió en las urnas gana la presidencia sin consulta popular. Duhalde se vuelve presidente de la Nación, pero tiene que renunciar a ser candidato en la próxima elección por haber sido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Una tradición federalista de más de un siglo. Pero al asumir el poder no puede dejar de revelar la verdad sobre

la situación económica del país. Tiene la valentía de devaluar el peso convertible y anunciar el fin de la ficción. El 15 de enero de 2002 desaparece la paridad peso-dólar, lo que provoca muchas víctimas: quienes depositaron pesos en los bancos y exigen retirar sus ahorros en dólares; las empresas y los particulares que habían suscrito deudas en moneda americana. Solo los exportadores se benefician con la devaluación. Y el radicalismo aun cuando no tiene la responsabilidad de la catástrofe monetaria se encontrará desprestigiado por mucho tiempo. La duda que siempre ha existido, desde Yrigoyen, sobre la competencia económica de los radicales se ha confirmado. La UCR se divide. Su candidato oficial en la elección del 27 de abril de 2003 obtiene 2,3 % de los sufragios, 20 años después del triunfo de Alfonsín. El país anda a la deriva. La pobreza se ha triplicado en tres años. La sociedad parece en vías de desintegración. El trueque y las pseudo monedas provinciales suplen la falta de liquidez. Es en este contexto que se organizan las elecciones de 2003 para normalizar la situación. Menem es candidato de nuevo. Duhalde ineligible va a tratar de cortar el camino de la Casa Rosada apoyando a un gobernador popular de una de las provincias ricas. Los de Santa Fe y de Córdoba no aceptan. Duhalde termina apadrinando a un gobernador poco conocido de la lejana provincia patagónica de Santa Cruz, Néstor Kirchner.

En la primera vuelta el expresidente Menem llega primero recogiendo 24,25 % de los sufragios. Pero su nivel de rechazo es tan alto que no tiene casi ninguna posibilidad en el balotaje. Kirchner lo sigue con 22,4 %. Se llegaría así con los votos del tercer candidato peronista, cuyos electores no tienen ninguna simpatía por Menem, a 61 % de los sufragios. Pero Menem, oportunista, ególatra, que no acepta perder una elección va a sabotear la consulta retirándose de la contienda. No habrá segunda vuelta y el vencedor tendrá su

legitimidad amputada y muchas dificultades para gobernar. De hecho, Néstor Kirchner se vuelve presidente de la Nación con el apoyo electoral más bajo de la historia de la democracia argentina. Es aun inferior a la tasa de desempleo del momento. Además, Santa Cruz —emirato petrolero austral poco poblado— no pesa mucho en la vida nacional. El presidente mal elegido no tiene ni partido ni base parlamentaria propia. Depende de Duhalde que lo ha designado. Así un jefe de Estado aislado y sin tropas va a gobernar un país en descomposición.

UN BIPARTIDISMO ASIMÉTRICO Y FRAGMENTADO

Kirchner es un presidente accidental y muchos piensan de poco futuro. Sin embargo, va a consolidarse rápidamente en el poder. Con una gran habilidad táctica e ideológica propone una nueva versión del peronismo con referencia al pasado reciente e idealizando a sus víctimas. Esta historia corregida exalta la saga infeliz de los revolucionarios de la JP y de los partidarios de la lucha armada condenados por el mismo general Perón a su vuelta a la Argentina en 1973. El nuevo presidente reivindica sin muchas pruebas su condición de sobreviviente de la guerra sucia de hace 30 años. En su defensa de la generación del 70 se reclama de Cámpora y de Evita dejando de lado al General. Para este revisionismo ideológico el presidente Kirchner asume una defensa retroactiva de los derechos humanos que coloca en un dispositivo de memoria y de reparación. Con los militares del proceso anula las limitaciones de responsabilidad penal de Alfonsín y los indultos de Menem. Se reabren los juicios de los represores y se llega desde el gobierno a afirmar que la dictadura militar no terminó en 1983 sino en 2003, con el fin de la impunidad.

Esta historia revisada atrae evidentemente a las izquierdas pasadas y presentes y hasta a sectores marxistas poco afectos al peronismo tradicional. En esa reconfiguración la clase obrera organizada cuenta poco. Los actores privilegiados de la síntesis sociopolítica kirchnerista son los desempleados y sus movimientos de *piqueteros*, los trabajadores del sector informal y del hábitat precario. Se les reserva una política asistencial que sí está en la tradición peronista de Eva Duarte a Duhalde. Pero esta nueva versión neoperonista no se hubiera afianzado durante 20 años sin la prosperidad que brindó en sus inicios una coyuntura excepcional de demanda exterior y de mejoría de los términos del intercambio. Este boom de las *commodities* va a salvar la situación argentina después de la quiebra y de la desintegración social del período 2001–2002 permitiendo un crecimiento económico de tipo asiático, de más del 8 % en los años 2003–2005 y hasta 2012, con excepción de 2008 cuando se produjo la crisis mundial de los subprimes en 2008. Los ingresos fiscales alcanzan el nivel de los países OCDE y permiten políticas sociales redistributivas generosas. El desempleo ha bajado de 50 % en tres años y la pobreza retrocede de 54 a 27 %. El presidente mal elegido tiene una fuerte legitimidad de ejercicio que traspasa las clases sociales. El neoperonismo K se vuelve popular. No solo Néstor Kirchner termina su mandato con un buen nivel de aceptación, sino que hace elegir a su esposa, la senadora Cristina Fernández, para el período 2007–2011 a la espera sin duda de su reelección posible en 2011. Su muerte repentina en 2010 le impide realizar este proyecto, pero no el despegue de un poder dinástico. En efecto, la presidenta Fernández de Kirchner se va a reelegir para un segundo mandato. Así es como la mayoría justicialista se ha reconstruido con otro nombre, pero no su permanencia que no está asegurada.

El cambio de mayoría y de presidente va a ocurrir en diciembre de 2015. Con 51,30 % de los sufragios, una coalición de centro derecha lleva a la Casa Rosada al exjefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Será el primer presidente de la Nación que no es ni peronista ni radical ni militar. Macri es un hombre de negocios, cuya familia se ha enriquecido en tiempos del proceso y de la patria contratista. Macri tiene el apoyo de una pequeña formación política de derecha, Propuesta Republicana (PRO) aliada con la UCR. PRO tiene bases en la Capital Federal. El radicalismo es un partido nacional bien implantado en las provincias, pero sin líder. Puede ofrecer a Macri la red política que le falta. El nuevo gobierno goza de un clima bastante sereno. Los mercados financieros internacionales ven con simpatía su política liberal de reducción de gastos. Su programa empieza con la supresión del control de precios y de los subsidios populares para los transportes, gas y electricidad. Pero no logra detener la inflación que alcanza 50 % al final del periodo presidencial. El FMI manifiesta su simpatía por la política económica ortodoxa de la Argentina otorgando al país un préstamo sin precedentes de 54 000 millones de dólares. Pero el Fondo despierta recuerdos de condicionamientos drásticos, de planes de ajuste y de austeridad; adentro como afuera lejos de restablecer la confianza en la economía argentina provoca inquietudes.

Mauricio Macri candidato a la reelección trata de atraer a los electores independientes asustándolos con una eventual victoria del peronismo más radical, alrededor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta táctica tiene como consecuencia alarmar a los medios financieros y poner en peligro la economía nacional. De hecho, Cristina Fernández no es candidata a pesar de su dominio del aparato peronista no solo porque conoce un alto nivel de rechazo

en el electorado no-justicialista, sino porque se enfrenta con varias causas judiciales pendientes por corrupción. Así será postulada para la presidencia por el Frente de Todos, amplia coalición de unión de los peronismos, a Alberto Fernández, exjefe de gabinete sin base política propia fuera del kirchnerismo. Su perfil socialdemócrata, moderado y pragmático, va a tranquilizar a los que temen una revancha del peronismo K.

La fórmula Fernández-Fernández vence. Una nueva alternancia en elecciones libres con Estado de derecho manifiesta la consolidación de la democracia representativa. Va a demostrar también que si el peronismo bien puede perder una elección ha ocupado, en sus versiones contradictorias, el poder durante 28 de los 40 años de democracia y más recientemente 16 años de los dos últimos decenios. Además, este movimiento variopinto gobierna ahora 16 de las 24 provincias. Ha perdido sus bases sindicales y ganado una fuerte implantación territorial.

Pero lo nuevo de la situación política a partir de 2003 es lo que se podría llamar la clarificación político-ideológica. El peronismo ya no cubre todo el universo político de la extrema derecha a la ultra izquierda y no puede reclamar el monopolio de la representación del conjunto del pueblo argentino. Esta clarificación lo sitúa más bien a la izquierda del espectro político. Pero este neoperonismo de centro izquierda no es un partido socialdemócrata de tipo europeo. Por su historia y sus orígenes sigue siendo «movimentista» y hasta antipartidos, porque según su cultura el justicialismo une a los argentinos cuando los partidos los dividen.

Asimismo, todas las características del modelo nacional-popular no han desaparecido en el peronismo de hoy. Podemos notar entre otras prácticas originarias su poco respeto a la separación de poderes y a la independencia de la justicia. Carlos Menem amplió el número de miembros de la Corte

Suprema para tener mayoría. Cristina Fernández quiso, en vano, democratizar el Consejo de la Magistratura sometándolo al legislativo. El estilo del justicialismo K sigue siendo plebiscitario y personalizado. Se rinde culto al desaparecido fundador de la dinastía, y el grupo La Cámpora —que responde al liderazgo de su hijo Máximo Kirchner— no duda en proclamar «Cristina eterna» durante una campaña electoral. En su apego a las tradiciones del Movimiento se reactivan, a veces, viejas dicotomías del primer peronismo. En 2008 durante el conflicto sobre las exportaciones agrícolas el gobierno sacó a relucir la oposición oligarquía agraria/pueblo que no correspondía a ninguna realidad presente.

Sin lugar a dudas un movimiento polifacético que reclamaba la exclusividad de la representación del pueblo y tachaba las oposiciones de antipatria era un factor de inestabilidad política. La transformación del Movimiento en Partido ha facilitado una reclasificación ideológica que permite la alternancia. Las elecciones oponen hoy líderes y programas. El peronismo K al ocupar el sector estatista, redistribuidor, solidario ha dejado a la oposición el liberalismo promercado y socialmente conservador. Las diferencias cubren también la política exterior. El nuevo peronismo es antiamericano, alineado con el sur global y latinoamericano. La oposición si bien no forma un solo partido es más bien atlantista prooccidental y antibolivariana. Dos imaginarios distintos se enfrentan. Tal vez la famosa grieta, la dualidad político-cultural que conoce el país y que se deplora, a menudo contribuye a hacer posible una democracia continua y duradera.

CONCLUSIÓN

El peronismo ha sido y sigue siendo el eje de la vida nacional desde hace 80 años. El justicialismo del general Perón, exiliado y revanchista hacia el país ingobernable. Hoy día es el peronismo que hace posible la democracia porque se ha transformado profundamente después de la muerte del fundador epónimo. Su democratización no se debe solo a la derrota de 1983 o a la voluntad de adaptación estratégica de sus dirigentes. La sociedad argentina ya no es la de la posguerra. Los sindicatos se han encogido y debilitado a medida que el número de obreros y de asalariados en la población activa se ha reducido porque el país se ha desindustrializado.

Varios presidentes de sensibilidad distinta han proclamado que la Argentina era ya un país normal. Esto será así evidente si se compara el país de hoy con el de hace medio siglo atrás, que terminó hace 40 años. Algunos se preguntan si puede haber un país normal sin un sistema de partidos equilibrados. De hecho, la democracia representativa no tiene modelo. El bipartidismo fragmentado y asimétrico existe en otros países que se consideran democráticos. El estado de derecho es la condición de la libertad de opción de los ciudadanos. Las alternancias políticas son la respiración del sistema representativo. Y de momento estos dos componentes no faltan en la república argentina.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- HALPERIN DONGHI, TULLIO (1994).** *La larga agonía del peronismo.* Ariel.
- QUATTROCCHI-WOISSON, DIANA (DIR.) (2002).** *L'Argentina après la débâcle. Itinéraire d'une recomposition inédite.* Michel Houdiard Editeur.
- QUIROGA, HUGO Y TCACH, CÉSAR (DIR.) (2006).** *Argentina, 1976–2006. Entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia.* Homo Sapiens.
- QUIROGA, HUGO (2010).** *La República desolada. Los cambios políticos en la Argentina (2001–2009).* Edhasa.
- ROUQUIÉ, ALAIN (2017).** *El siglo de Perón. Ensayo sobre las democracias hegemónicas.* Edhasa.
- SOUROUJON, GASTÓN.** *La politique argentine entre deux centennaires: fêtes civiques et imaginaires politiques sous le kichnérisme et le macrisme. Cahiers de l'Histoire immédiate, 57, printemps 2022, pp. 48–60.*
- THE ECONOMIST (2022).** *The agony of Peronism. Argentina's populist political movement is at its lowest ebb, 15 décembre 2022.*